

Devuélvanse las actuaciones al Juzgado de su origen, con copia certificada de esta sentencia; publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos, en cuanto al primero y tercer punto, y por mayoría en cuanto al segundo, lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*Miguel Luza.*—*Juan J. de la Garza.*—*José María Lozano.*—*José Arteaga.*—*Ignacio Ramírez.*—*Manuel de Castañeda y Nájera.*—*Ignacio M. Altamirano.*—*Simón Guzmán.*—*Luis Velásquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramírez.*—*Luis María Aguilar*, secretario.

Es copia que certifico. México, Octubre 14 de 1874.—*Lic. Enrique Landa*, oficial mayor.

## AMPARO

*Promovido ante el Juzgado de Distrito de Chihuahua por los CC. Juan Antonio y Pedro Aguirre, contra los procedimientos del Alcalde 2º de Aldama, que los despojó por medio de la fuerza armada, de la posesion de una mina de que eran denunciantes.*

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

En mi dictámen de 19 de Junio de este año, al tratarse de la prévia suspension del acto reclamado, dije lo que sigue:

"El C. Antonio Aguirre, por si y á nombre de su hermano Pedro del mismo apellido, ha ocurrido pidiendo amparo á la Justicia federal, por creer violadas en su persona, las garantías que otorga la Carta fundamental de la República, pidiendo á la vez, se mande suspender previamente el acto reclamado: aunque en el escrito de queja no se expresa con claridad cual es la ga-

rantía violada, parece ser la que concede el artículo 27 de la Constitucion federal; parece tambien por la redaccion del escrito, que los quejosos se limitan á solicitar la suspension del acto reclamado, mientras se concluye un juicio que han entablado ante el Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Pedido informe á la autoridad ejecutora del acto reclamado, que lo es el Juez 2º de 1ª instancia del Canton Aldama, este lo ha rendido, y por vía de justificacion, aunque sin pedírsela, remite el expediente del juicio civil, que se ha seguido entre los quejosos y el C. Rafael Gameros, y en el que se ventila un interdicto de recuperar la posesion de la mina Santa Eduwigis. Examinado por el que lleva la voz fiscal este expediente, ha visto: que en efecto, se ha seguido por todos sus trámites, un juicio civil entre las partes contendientes y en el cual ha recaído sentencia definitiva, de la que apelaron los quejosos, concediéndose la apelacion con consulta del letrado, en solo el efecto devolutivo; como consecuencia de esta sentencia, el C. Rafael Gameros entró en posesion de la mina, ó lo que es lo mismo, el Juez que la pronunció la ha ejecutado, á reserva de lo que determine la Sala 2ª del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, al sustanciar el recurso de apelacion interpuesto, y concedido en uno de sus efectos."

Esto fué lo que manifesté en mi anterior dictámen, pidiendo se declarara no proceder la prévia suspension que se solicitaba, y así tuvo á bien determinarlo ese Juzgado, disponiendo se pidiese de nuevo informe á la autoridad ejecutora del acto reclamado, á fin de sustanciar el juicio en lo principal.

Esta autoridad rindió ya el informe pedido, en el que viene reproduciendo las razones que anteriormente tiene alegadas.

El que lleva la voz fiscal pidió se abriese el juicio á prueba, lo que fué concedido por decreto de 18 de Julio de este año. En 6 del corriente, se dió por terminado este término, sin que los quejosos hubiesen rendido algunas, ni presentado su alegato, no obs-

tante terminar hoy el término concedido para hacerlo.

En vista pues de esto, y reproduciendo las razones que hice valer en mi dictámen de 19 de Junio, el que lleva la voz fiscal pide: que con fundamento de los artículos 101 y 102 de la Constitución federal y de la ley de 20 de Enero de 1869, se declare: que la Justicia de la Union no ampara ni protege á los CC. Juan Antonio y Pedro Aguirre, contra los actos del C. Alcalde 2º y Juez de 1ª instancia del Canton Aldama, por no haber justificado que en sus personas se violara alguna de las garantías otorgadas en la Carta fundamental de la República, y que previa notificacion de la sentencia que recaiga, se eleven los autos á la Suprema Corte de Justicia para su revision, y se remitan asimismo las copias que sean necesarias para que se públque, en el periódico del Estado y en los de la Capital de la República.

Chihuahua, 18 de Agosto de 1874.—  
*J. de D. Burgos.*

Es copia. Chihuahua, 24 de Agosto de 1874.—*J. de D. Burgos.*

#### *Sentencia del C. Juez de Distrito.*

Chihuahua, Agosto 19 de 1874.—Constando de autos: que el 15 de Junio próximo pasado presentó escrito el expresado ciudadano Aguirre, manifestando, que habia denunciado la mina nombrada Santa Eduwigis, sita en la jurisdiccion del Canton Aldama; que le fué admitido el denuncia y señaládole el plazo dentro del cual debia dársele posesion, en cuya virtud trabajaba dicha mina, aun cuando el Juez omitió los pregones: que en este estado, el C. Rafael Gameros promovió un interdicto de recobrar la posesion de la referida mina de Santa Eduwigis; y el C. Juez apesar de haberlo recusado, los despojó de la repetida mina: que consideran violadas en sus personas, las garantías que concede la Constitución federal y concluye pi-

diendo: que el Juzgado mande suspender los trabajos de la mina, poner un interventor ó lo que crea justo, entre tanto el Supremo Tribunal resuelve en grado de vista la apelacion interpuesta; que el C. Alcalde 1º y Juez de 1ª instancia de Aldama informen justificadamente, diciendo: que son falsos, en parte los asertos de los quejosos; que en efecto habia pedido fuerza armada al Supremo Gobierno del Estado, por estar impedido para darla el Gefe político; y para prevenir un desorden que temia por las amenazas de los Aguirre; que en el interdicto promovido por Gameros, se habia sugetado á la ley de Administracion de Justicia del Estado de Diciembre de 1869, habia consultado con el Asesor y admitido á los Aguirre la apelacion, ante el Supremo Tribunal de Justicia. Que previo informe del C. Promotor fiscal, se decretó no haber lugar á suspender los trabajos de la mina, ni á poner interventor, ó dictar otra providencia. Que se pidieron los informes que dispone el art. 9 de la ley de la materia; se recibió el negocio á prueba y se tuvieron los autos, por seis dias, en la Secretaría á disposicion de las partes, para que tomasen apuntes é hiciesen sus alegatos.

Considerando: que los Sres. Aguirre no determinan la garantía ó garantías que consideran violadas en sus personas.

Considerando: que los referidos Aguirre se limitaron á pedir que se suspendieran los trabajos de la mina, entre tanto el Supremo Tribunal fallaba en grado de apelacion, que se pusiese interventor, ó que el Juzgado dictase la providencia que creyera justa.

Considerando: que no adujeron prueba alguna, ni alegaron en favor de su intencion y derecho.

Con fundamento de los arts. 101 y 102 de la Constitución y de la ley de 20 de Enero de 1869, se declara: que la Justicia de la Union, no ampara ni protege á los CC. Juan Antonio y Pedro Aguirre, contra los actos del C. Alcalde 2º y Juez de 1ª instancia del Canton Aldama, por no haber

justificando que en sus personas se violara alguna de las garantías concedidas en la Carta fundamental de la República.

Notifíquese; publíquese en el periódico oficial del Gobierno del Estado; remítase copia al Semanario Judicial y elévense estos autos á la Suprema Corte de Justicia para su revision.

El C. Juez, definitivamente juzgando, así lo decretó y firmo.—Doy fé:—*José Hierro*.—*A. E. Perez*, secretario.

Es copia. Chihuahua, Agosto 20 de 1874. —*José Hierro*.—*Abraham E. Perez*, secretario.

### *Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.*

México, 10 de Octubre de 1874.—Visto el juicio de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito de Chihuahua por los CC. Juan Antonio y Pedro Aguirre, contra los procedimientos del alcalde 2º de Aldama, que los despojó por medio de la fuerza armada, de la posesion de una mina de la que eran denunciantes. Visto el informe de la autoridad responsable; el parecer fiscal y la sentencia del Juez de Distrito.

Con fundamento de los artículos 101 y 102 de la Constitucion, se declara: que es de confirmarse y se confirma por sus propios legales fundamentos, la sentencia del C. Juez de Distrito, que niega el amparo á los quejosos.

Devuélvanse las actuaciones al Juez de Distrito que las elevó á revision, acompañándole testimonio de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así lo decretaron por unanimidad de votos los CC. Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal pleno de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—Presidente.—*Miguel Auza*.—Ministros.—*Juan J. de la Garza*.—*José María Lozano*.—*José Ar-*

*teaga*.—*Ignacio Ramirez*.—*Manuel de Castañeda y Nájera*.—*Ignacio María Altamirano*.—*Luis Velasquez*.—*M. Zavala*.—*José García Ramirez*.—*Luis María Aguilar*, secretario.

Es copia que certifico. México, 4 de Noviembre de 1874.—*Enrique Landa*, oficial mayor.

## JUICIO

*Seguido en el Juzgado de Distrito de Colima, contra los Sres. Octling y Bartling, del comercio de Manzanillo, sobre faltas de observancia del Arancel, en los efectos venidos á su consignacion, en el vapor americano "Salvador."*

### *Sentencia del C. Juez de Distrito.*

Colima, Agosto 14 de 1874.—Visto este juicio verbal promovido contra los Sres. Octling y Bartling, del comercio de Manzanillo, sobre faltas de observancia del Arancel, en los efectos venidos á su consignacion, en el vapor americano "Salvador," que procedente de Liverpool fondeó en la bahía de dicho puerto, el día 12 del mes pasado Junio; consistiendo tales faltas, en no haber especificado separadamente las medicinas contenidas en siete cajas, resultando de esta omision diez y seis faltas á las prescripciones del mismo Arancel; en haber omitido el valor de factura correspondiente, á otras tres, siendo por lo mismo tres estas faltas; y por suplantacion en calidad de otras dos cajas, con peso de 123 kilogramos, manifestadas como cartonaje que paga 17 centavos por cada una, no siendo sino papel bristol para fotografía, que paga conforme á la fraccion 299 de la tarifa, 43 centavos, habiendo incurrido por tal motivo, en el mínimo de la pena impuesta por las dos primeras omisiones, en los artículos 28 del